EXPEDIENTE No.: ****
QUEJOSO: Q1
AGRAVIADO: V1
RESOLUCIÓN: RECOMENDACIÓN
46/2014
AUTORIDAD
DESTINATARIA: H. AYUNTAMIENTO DE AHOME,
SINALOA

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 17 de octubre de 2014.

LIC. ARTURO DUARTE GARCÍA,
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHOME, SINALOA.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º; 2º; 3º; 4º Bis y 77 Bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1º; 7º, fracción III; 16, fracción IX; 57 y 59 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, así como 1º; 4º; 77; 94; 95 y 96 de su Reglamento Interno, ha examinado los elementos contenidos en el expediente ****, relacionados con el escrito de queja interpuesto por el señor Q1, y vistos los siguientes:

I. HECHOS

A. El día 12 de enero de 2013, policías municipales ingresaron violentamente al domicilio del señor Q1, ubicado en ****, del fraccionamiento ****, Los Mochis, Ahome, Sinaloa, quienes empujaron y lesionaron a su esposa, cuando serían aproximadamente las 03:00 a.m., sacando a su hijo V1, cuando se encontraba dormido y se lo llevaron detenido en ropa de dormir y descalzo.

A lo que inmediatamente se trasladaron a las oficinas de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome donde fueron atendidos por un policía que se encontraba en la entrada de dichas instalaciones y al pedirle información sobre la situación de su hijo, dicho agente les manifestó que al parecer a su hijo se le estaba involucrando en un delito de robo y que fueran al Ministerio Público, cuyas oficinas se encuentran ubicadas en ****, y que ahí podían proporcionarles más información, por lo que se trasladó a dichas oficinas en compañía de su abogado particular y ahí ingresaron a la agencia del Ministerio Público del fuero común Especializada en el Delito de Robo de Vehículo, siendo atendidos por la licenciada SP1, quien dijo ser la titular de dicha agencia y que ella se encontraba esperando unos partes

informativos y hasta que los recibiera les podía dar información de su hijo, por lo que sus abogados permanecieron todo el día sábado 12 de enero de 2013, esperando afuera de dicha agencia para saber a qué hora iban a tomarle declaración a su hijo V1.

Ya como a las 17:00 horas de ese mismo día, sus abogados fueron informados que su hijo declararía el día domingo 13 del mismo mes y año, después de las 14:00 horas; sin embargo, fue totalmente falso ya que su hijo había declarado a las 01:30 horas del día domingo, resultando contrario a la información que la representante social les había proporcionado.

De ahí que declaró en la averiguación previa 1, es decir, que en todo momento la licenciada SP1 se estuvo conduciendo de manera dolosa y mentirosa en todo lo relacionado a la información que debió de haberle proporcionado respecto a la detención de su hijo, incluso el día 13 de enero de 2013, como a las 06:00 de la mañana quiso hacer que su hijo firmara la confesión aceptando los hechos y delito que no cometió, aún más que en dicha confesión se ponía una fecha día y hora que supuestamente se estaba tomando dicha declaración o circunstancias diferentes a su situación.

Así como también quería que revocara a los abogados particulares sin que su hijo hubiera manifestado de viva voz dicha declaración, además que la citada agente social se estuvo conduciendo de manera mentirosa, ya que no les informó de manera precisa a qué hora declararía su hijo, por lo que también el día 15 de enero de 2013, siendo como las 09:30 horas, su hijo les dijo que el día anterior, es decir, el 14 de enero de 2013, la representante social, en compañía de otras personas, lo obligaron a firmar varias hojas que llevaban impresas sin permitirle que las leyera, por lo que consideró que a su hijo se le transgredieron sus derechos humanos y constitucionales, ya que fue detenido el día 12 de enero de 2013, como a las 03:00 de la mañana, y hasta en ese momento no lo había puesto a disposición del juez competente ni puesto en libertad.

B. Con motivo de la queja, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos inició el procedimiento de investigación registrándose bajo el número de expediente ****, solicitando informes respectivos a los CC. Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, agente del Ministerio Público del fuero común Especializado en el Delito de Robo de Vehículo y al Coordinador de Jueces del Tribunal de Barandilla de esta ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, esto de conformidad con lo establecido en los artículos 39, 40, 45 y 54 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

II. EVIDENCIAS

En el presente caso las constituyen:

1. Escrito de queja presentado ante esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos por el señor Q1 de fecha 15 de enero de 2013, mediante el cual señaló actos transgresores a los derechos humanos de su hijo V1, mismos que atribuyó a personal de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y de la Agencia del Ministerio Público del fuero común Especializada en el Delito de Robo de Vehículo de esta ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa.
2. Oficio número **** de fecha 16 de enero de 2013, mediante el cual se solicitó a la titular de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común Especializada en el Delito de Robo de Vehículo de esta ciudad, un informe respecto a los actos señalados en el escrito de queja presentado ante esta CEDH.
3. Informe recibido mediante oficio número **** de fecha 24 de enero de 2013, suscrito por la titular de la Agencia del Ministerio Público del fuero común Especializado en el Delito de Robo de Vehículo de esta ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

En el referido informe adjuntó copia certificada de la siguiente documentación:

- a) Oficio número **** de fecha 12 de enero de 2013, mediante el cual el Coordinador de Jueces del Tribunal de Barandilla de la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, puso a su disposición al C. V1, como probable responsable del delito de robo de vehículo y lo que resulte.
- b) Parte informativo número **** de fecha 12 de enero de 2013, rendido por elementos que llevaron a cabo su detención de esa Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, Sinaloa.
- c) Ratificación que los agentes AR1 y AR2, adscritos a la Segunda Compañía de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, el día 12 de enero de 2013, mismos que realizaron la detención del C. V1.
- d) La denuncia por comparecencia que hizo el señor N1, ante esa representación social, en fecha 10 de enero de 2013.

- e) Certificado médico número **** de fecha 12 de enero de 2013, signado por el médico adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, realizado al agraviado V1.
- f) Del oficio número **** de fecha 12 de enero de 2013, del cual la agente social ordena al Coordinador de Jueces del Tribunal de Barandilla de esta ciudad, para que deje en inmediata libertad al C. V1 y otros, solo por el delito de robo de vehículo cometido en perjuicio del patrimonio económico de N1, por no haberse acreditado la detención en flagrancia delictiva de acuerdo a lo estatuido en los artículos 16 de la Constitución General y 116 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa.

Asimismo, mediante el cual ordenó al servidor público para que notificara al C. V1, a fin de que compareciera ante esa representación social y se le recepcionara su declaración ministerial relativa a los hechos.

4. Mediante oficio número **** de fecha 11 de febrero de 2013, se solicitó informe al Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome relativo a los hechos que manifestó el quejoso.

5. Con oficio número ****/2013 de fecha 13 de febrero de 2013, se recibió la información solicitada al servidor público encargado de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, Sinaloa.

6. Con similar número **** de fecha 3 de mayo de 2013, se solicitó nuevamente al encargado de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome informe respecto a la detención de V1.

7. Con el similar **** de fecha 3 de mayo de 2013, se solicitó información al Coordinador de Jueces del Tribunal de Barandilla de Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

8. Con oficio número ****/2013 de fecha 7 de mayo de 2013, se recibió la información del encargado de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome.

9. Con oficio número ****/2013 de fecha 6 de mayo de 2013, el funcionario público encargado del Tribunal de Barandilla proporcionó la información solicitada.

10. Mediante oficio número **** de fecha 4 de julio de 2013, se solicitó información a la representante social encargada en el delito de robo de vehículo de esta ciudad.

11. Con el similar número **** de fecha 11 de julio de 2013, la titular de la Agencia del Ministerio Público del fuero común Especializada en el Delito de Robo de Vehículo en Ahome rindió la información solicitada.

12. A efecto de contar con mayores elementos en cuanto al expediente en comento se solicitó nuevamente a la titular de la representación social multicitada informe mediante el oficio número **** de fecha 15 de julio de 2013.

13. Mediante oficio número **** de fecha 18 de julio de 2013, se da respuesta al oficio **** por parte del Ministerio Público del fuero común auxiliar de la agencia de robo de vehículo en Ahome, encargado por ministerio de ley.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

El día 12 de enero de 2013, el C. V1 fue privado de la libertad por elementos adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, cuando dichos elementos trasladaban a otros detenidos que iban a bordo de una camioneta que contaba con reporte de robo del día 9 de enero de 2013, cuando su propietario intentaba abordarla en las afueras del ****, de la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

Según el dicho de los elementos policiacos, V1 llegó a bordo de un vehículo de su propiedad hasta las instalaciones de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, a exigir de manera grosera que dejaran en libertad a las personas que llevaban detenidas, por lo que los agentes procedieron a arrestarlo poniéndole los candados de mano.

Luego entonces, después de haberle efectuado revisión a su vehículo marca ****, línea ****, tipo ****, color ****, modelo ****, con placas para circular **** del Estado de Sinaloa, con número de serie ****, se le encontró en el interior un arma corta, tipo pistola, de color negro, de marca ****, calibre 4.5/.177 mm, con matrícula ****, el cual le fue asegurada y posteriormente fue trasladado a las instalaciones de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

Estando en dichas instalaciones manifestó llamarse V1, y que la razón por la que exigía que las personas detenidas fueran liberadas era por el temor a que lo

delataran que junto con él y otros de nombres N2 y N3 habían participado en el robo de la camioneta marca ****, color ****, modelo ****, con número de serie ****, y con placas **** del Estado de California.

Por lo que fue trasladado al Tribunal de Barandilla, quedando a disposición del coordinador de dicho tribunal y a su vez fue remitido ante la Agencia del Ministerio Público del fuero común Especializada en el Delito de Robo de Vehículo y posteriormente puesto en libertad por no haberse acreditado la flagrancia delictiva.

IV. OBSERVACIONES

Si bien es cierto que a esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos no le corresponde investigar conductas delictivas ni imponer sanción a los responsables, sin embargo sí es su deber investigar sobre violación a derechos humanos que sean consecuencia de las actuaciones por parte de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.

En ese tenor, es importante destacar que esta autoridad en derechos humanos no se opone a que los servidores públicos encargados de prevenir, investigar y perseguir los delitos, realicen su actividad o imponer sanción alguna cuando el caso lo amerite, sino por el contrario estamos totalmente de acuerdo en que tales autoridades busquen la paz social, pues es una necesidad común que la sociedad exige, siempre y cuando se lleven a cabo con apego a la legalidad y con respeto a los derechos humanos, así como lo establecen diversos ordenamientos legales y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

No obstante, que por derechos humanos debe entenderse como “los derechos naturales del hombre, pues tales derechos son inherentes a la persona humana, es decir, su naturaleza se ostenta como anteriores y superiores del Estado constriñéndose éticamente a respetarlos y a establecer en el orden jurídico positivo” que no solo sirva de observancia sino también para su cumplimiento.¹

Así entonces, este organismo estatal entre sus facultades es vigilar, analizar los actos de los servidores públicos en el desempeño de su cargo y de comprobarse alguna responsabilidad o irregularidad por parte de éstos, serían acreedores de una sanción administrativa y/o penal.

¹ Burgoa O, Ignacio. *Las Garantías Individuales*. ed. 39ª, Editorial Porrúa. México, 2007, p. 53.

En consecuencia, del análisis lógico jurídico de las evidencias que integran el expediente de queja número ****, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos advirtió que en el caso que nos ocupan se transgredieron derechos humanos en perjuicio del C. V1, actos contrario a la libertad, integridad y seguridad personal y legalidad y seguridad jurídica, consistentes en detención ilegal, malos tratos, resultados de la prestación indebida del servicio público, atribuibles a elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

DERECHO HUMANO VIOLENTADO: A la legalidad y seguridad jurídica

HECHOS VIOLATORIOS ACREDITADOS: Detención arbitraria

Una vez visto las cuestiones anteriores, es importante analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es decir, encontrar el cauce que dio origen a la queja que hoy se resuelve, interpuesta por el señor Q1, es decir, la forma en que su hijo V1, fue privado de la libertad cuando se encontraba dormido en su domicilio ubicado en ****, del fraccionamiento ****, Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

Derivado de ello, se solicitó informe al Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, mediante oficios números **** y **** de fechas 11 de febrero y 3 de mayo de 2013, respectivamente, del cual dio respuesta con los diversos números **** y **** de fechas 13 de febrero y 7 de mayo de 2013.

De dichos informes se desprende mediante parte informativo número ****-2013, que cuando los agentes AR1 y AR2, andaban en un recorrido de vigilancia por la avenida **** de poniente a oriente antes de llegar al boulevard **** en la colonia **** en la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, se percataron que unas personas andaban en una camioneta sin placas para circular y quienes al ver la presencia de la unidad oficial optaron actitud sospechosa e intentaron huir y posteriormente les dieron alcance siendo detenidos.

De ahí les fue practicado revisión preventiva sin haberles encontrado nada ilícito entre sus ropas pero a la camioneta en la que iban a bordo resultó ser la del señor N1, que le había sido despojada el día 9 de enero de 2013 por un sujeto armado en las afueras del **** en esta ciudad.

Y que al ser trasladados a las instalaciones de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, llegó el hoy agraviado, a bordo de un vehículo tipo ****, línea ****, del cual descendió y exigía de manera grosera a los elementos policiales que liberaran a las dos personas que llevaban detenidas.

De lo anterior, la autoridad señaló que los agentes procedieron a arrestarlo y a ponerle los candados de mano, seguidamente le practicaron revisión preventiva a su vehículo que lo es una ****, línea ****, tipo ****, color ****, modelo ****, con placas **** del Estado de Sinaloa, encontrándole una arma de color negro en la guantera de dicho vehículo, un arma tipo pistola, de color negro, de marca ****, calibre 4.5/0177 MM, con matrícula ****.

Estando en las instalaciones de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, dijo llamarse V1, y la razón por la que quería que dejaran en libertad a las personas de nombres N4 y N5 porque andaban a bordo de una camioneta que era robada, y temía a que ellos lo delataran ya que juntos y con la ayuda de otras dos personas de nombres N3 y N2 habían cometido el robo de dicha camioneta siendo de la marca ****, línea ****, color ****, modelo ****, sin placas para circular, con número de serie ****, a quien le fue despojado al señor N1, el día 9 de enero de 2013 en las afueras del ****, situado en **** por el boulevard **** y boulevard ****, en la colonia ****, en la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

De esta manera, para la realización de tal robo utilizaron un vehículo de su propiedad que lo es de la marca ****, línea ****, tipo ****, color **** modelo ****, con placas para circular **** del Estado de Sinaloa, con número de serie ****, que se encontraba en las afueras de su domicilio, y según dicho de los policías lo corroboraron y con el servicio de una grúa lo trasladaron hasta la pensión vehicular centenario ubicado en el ejido México en esta ciudad.

Asimismo, las personas detenidas proporcionaron sus nombres resultando ser N4, N5, además del agraviado V1, donde les practicaron dictamen médico a cada uno por el doctor SP2, y quedaron a disposición del juez calificador en turno así como los vehículos ya antes descritos.

Una vez analizado lo anterior, es evidente que la detención no se efectuó bajo los ordenamientos legales en el supuesto de la flagrancia delictiva o inmediato en la ejecución de ésta, toda vez que los elementos aprehensores precisaron que el agraviado V1 llegó a las instalaciones de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, cuando trasladaban a las personas detenidas a exigir que los dejaran en libertad por el temor a que dijeran que él también había participado en el robo de la unidad motriz.

Por lo que fue puesto a disposición del Juez del Tribunal de Barandilla y posteriormente a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común Especializada en el Delito de Robo de Vehículo, quien calificó de ilegal la

detención y ordenó la inmediata libertad del V1 por no haberse configurado la flagrancia delictiva.

En ese contexto, cabe precisar que los servidores públicos transgredieron el derecho a la libertad así como lo establecido por la legislación penal y contraviniendo a lo establecido en el artículo 14 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra reza:

“Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.”

DERECHO HUMANO VIOLENTADO: Derecho a la integridad y seguridad personal

HECHO VIOLATORIO ACREDITADO: Malos tratos

El término malos tratos no sólo debe entenderse como el sufrimiento causado por lesiones a cierta persona en su cuerpo, sino también incide en el sufrimiento que le pueda ser causado en su psíquico, al ser coaccionado o agredido verbalmente infiere en su sentimiento, por lo que no sólo pueda referirse malos tratos las lesiones visibles sino también aquellas que subjetivamente sabemos que existen.

En tal razonamiento, los malos tratos no sólo pueden materializarse en lesiones corporales, sino también en actos de autoridad basados en situaciones como exclusión, no atención, ignorar a las personas, no atención justificada a sus demandas, etc. ²

De ahí entonces, que del dictamen médico practicado al quejoso por el doctor SP2, adscrito al Tribunal de Barandilla con certificado médico número **** de la misma fecha en que fue detenido el C. V1, se advierte que las lesiones que presentaba al momento de ser puesto a disposición del encargado del Tribunal de Barandilla presentaba “lesión dermoepidérmica en brazo derecho tercio

² Ríos Estavillo, Juan José, Bernal Arellano Jhenny Judith, *Hechos Violatorios de Derechos Humanos en México*, Editorial Porrúa. Pág. 27.

medio cara lateral externa y se acompaña proceso inflamatorio leve y dolor, manifiesta dolor en cráneo sin lesión aparente, lesión visible EF clínico”.

Es tangible que los elementos aprehensores no sólo transgredieron el derecho a la libertad del quejoso, sino también el derecho a la integridad y seguridad personal toda vez que también le ocasionaron lesiones en su superficie corporal, por ello no es necesario ir más allá si se trata de lesiones graves o no graves si ponen en peligro o no la vida, o si dejan vestigios o cicatrices, sino más bien la forma en que llevaron a cabo la detención, es decir, los mecanismos que emplearon, pues no se espera que se cumpla con algunos de los aspectos señalados para darse cuenta que los elementos policiacos violentaron el derecho a la integridad y seguridad personal del agraviado.

Así lo confirma la representante social quien después de haberle recepcionado su declaración ministerial ella advirtió que el agraviado presentaba “un equimosis en la parte interior del antebrazo izquierdo de forma irregular de color rosita, equimosis en el antebrazo del lado derecho de forma circular de color rojo, y refiere dolor a la altura del pecho”, mismo que le manifestó que dichas lesiones se las ocasionó al momento de ser detenido por sus aprehensores.

Ahora bien, en el parte informativo los agentes policiacos no indicaron que el hoy agraviado se resistiera al arresto, por lo que indica que evidentemente fue objeto de lesiones al momento de ser detenido.

Es de considerarse entonces, que los hechos descritos en esta Recomendación violaron los derechos humanos a la integridad y seguridad personal y a una ineficiente prestación del servicio público a los que está sujeta toda autoridad, en agravio del C. V1, con lo cual se delata que transgredieron los ordenamientos legales ya referidos, así como diversos instrumentos internacionales ratificados por México, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, citados en los numerales 3 y 5, en la que señalan que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, y nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

En concordancia con lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 5.1 que establece: “el derecho a la integridad personal, al señalar que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, del mismo modo nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles inhumanos o degradantes.”

Así también, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos estatuye en el artículo 7º que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,

inhumanos o degradantes... El artículo 9.1. “todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal”.

Aunado a esto, los derechos humanos son elecciones sociales, culturales, económicas y políticas del hombre en un determinado momento histórico, de tal suerte que su contenido y sus alcances van variando de un momento a otro. Lo que es invariable es la moralidad básica que sustenta estos derechos, que en este caso es la dignidad humana.³

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaran de los derechos humanos reconocidos en esta constitución y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaran de conformidad con esta constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en consecuencia, el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

Constitución Política del Estado de Sinaloa

“Art. 11 El Estado de Sinaloa, como parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, se constituye en un Estado democrático de derecho, cuyo fundamento y objetivo último es la protección de la dignidad humana y la promoción de los derechos fundamentales que le son inherentes.”

Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa:

³ Silva García Fernando, “Cómo se hacen valer los Derechos Humanos”, El Mundo del Abogado. Año 13, num.135, julio 2010, p. 32.

“Artículo 2. Es sujeto de esta Ley, toda persona física que desempeñe o haya desempeñado un empleo, cargo o comisión, de cualquier naturaleza en la administración pública estatal o paraestatal, municipal o paramunicipal, así como en las sociedades y asociaciones similares a estas, en Organismos que la Constitución Política del Estado de Sinaloa y leyes otorguen autonomía y, en los Poderes legislativo y Judicial del Estado, con independencia de la jerarquía, denominación y origen del empleo, cargo o comisión, así como del acto jurídico que les dio origen.

Artículo 3. Los servidores públicos en ejercicio de su función serán sujetos de responsabilidad administrativa cuando incumplan con sus deberes o incurran en las conductas prohibidas señaladas en esta ley, así como en aquellas que deriven de otras leyes y reglamentos.

.....

Artículo 14.- Es responsabilidad de los sujetos de esta ley, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a las obligaciones previstas en la misma, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones.

Artículo 15.- Todo servidor público, tendrá los siguientes deberes:

I. Cumplir con el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público;

.....”

Como puede identificarse, las evidencias de malos tratos sufridos por el C. V1, queda acreditado ante esta Comisión Estatal que durante la detención del quejoso, éste fue objeto de malos tratos y golpes en su integridad física por parte de agentes de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

Concluyendo así que dichos agentes incumplieron su deber de resguardar y velar por la vida e integridad física de toda persona detenida, supuesto señalado por la fracción IX, del artículo 40 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De la misma manera, contravinieron los principios de honradez, legalidad, objetividad, eficiencia y respeto hacia los derechos humanos que deben ser observados por todo elemento de seguridad pública en el país, lo anterior de acuerdo con el artículo 6° de la Ley General en mención.

Máxime, este Organismo Estatal reconoce los aciertos que personal de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, llevan a cabo para salvaguardar la seguridad de la sociedad; sin embargo, reprueba los malos mecanismos que los elementos usan para efectuar la detención de un presunto responsable o aquellos que cometen una falta, abusando de su poder.

Todo esto implica que todo servidor público está obligado a acatar cabalmente y respetar lo establecido por los ordenamientos jurídicos que los rige, pues la responsabilidad administrativa es la obligación que tiene el servidor público de comparecer ante la autoridad, por haberle imputado un hecho típico, de responder del mismo, por haber actuado con culpabilidad (dolo o culpa) y no existir causa legal que justifique su proceder o lo libere de la sanción.⁴

Y como consecuencia de ello, es necesario que tales hechos sean investigados por el correspondiente órgano interno de control y de ser procedente se apliquen las sanciones administrativas que conforme a derecho procedan de manera independiente de la responsabilidad administrativa o penal en que pudieran haber incurrido.

Con base en lo expuesto anteriormente, y al tener como marco el artículo 1° de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, que precisa como objetivo último en la entidad federativa la protección de la dignidad humana y la promoción de los derechos fundamentales que le son inherentes, así como al artículo 4° Bis, segundo párrafo, que afirma que los derechos humanos tienen eficacia directa y vinculación a todos los poderes públicos, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa se permite formular respetuosamente a usted, señor Presidente Municipal de Ahome, Sinaloa, como autoridad superior jerárquica, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA. Instruya a quien corresponda para que al considerar los actos que motivaron la presente investigación, así como los razonamientos expuestos por esta Comisión Estatal, se inicie el procedimiento administrativo en contra de los

⁴ Amaya Barón Mario Ismael, *Los presupuestos de la Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos*. El Mundo del Abogado. Año 10, núm.97, mayo 2007. p. 20.

policías AR1 y AR2, adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, quienes transgredieron los derechos humanos del C. V1, durante su detención causándole lesiones en su integridad personal, además de malos tratos, de haberlo detenido ilegalmente sin que se concretara la flagrancia delictiva, de conformidad con lo que establece la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado y la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, a fin de que se impongan las sanciones que resulten procedentes.

SEGUNDA. A fin de que casos como el estudiado no vuelvan a suscitarse en el futuro, gírese las instrucciones necesarias a efecto de que se lleven a cabo acciones inmediatas para que el personal que labora en la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, Sinaloa, sea capacitado en materia de derechos humanos, especialmente con apego a la legalidad con respeto a los derechos humanos en la detención de toda persona.

TERCERA. Gírese las instrucciones necesarias a quien corresponda para que los partes informativos elaborados por el personal operativo de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, Sinaloa, cubran todos los requisitos dispuestos por el artículo 43 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La presente Recomendación tiene el carácter de pública y se emite con el propósito fundamental, tanto de hacer una declaración respecto de una conducta irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley, como obtener la investigación que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualquiera otras autoridades competentes para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate.

VI. NOTIFICACION Y APERCIBIMIENTO

Notifíquese al licenciado Arturo Duarte García, Presidente Municipal de Ahome, de la presente Recomendación misma que en los archivos de esta Comisión quedó registrada bajo el número 46/2014, debiendo remitírsele con el oficio de notificación correspondiente una versión de la misma con firma autógrafa del infraescrito.

Que de conformidad con lo estatuido por el artículo 58 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dentro de un plazo de cinco días hábiles computable a partir del día hábil siguiente de aquél en que se haga la

notificación respectiva, manifieste a esta Comisión si acepta la presente Recomendación, solicitándosele expresamente que en caso negativo, motive y fundamente debidamente la no aceptación; esto es, que exponga una a una sus contra argumentaciones, de modo tal que se demuestre que los razonamientos expuestos por esta Comisión carecen de sustento, adolecen de congruencia o, por cualquiera otra razón, resulten inatendibles.

Todo ello en función de la obligación de todos de observar las leyes y específicamente, de su protesta de guardar la Constitución lo mismo la General de la República que la del Estado, así como las leyes emanadas de una y de otra.

También se le hace saber que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tuvo una importante reforma en materia de derechos humanos la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de junio de 2011.

El segundo párrafo del apartado B del artículo 102 de la misma, expresamente señala hoy día:

“Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.”

Asimismo lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su reforma de fecha 10 de junio de 2011, que menciona en su artículo 1° que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En consecuencia, aquellas autoridades a quienes se les dirija una Recomendación de parte de esta autoridad constitucional en derechos humanos, deben constreñirse a señalar que tiene por aceptada o no dicha Recomendación, más no señalar que la aceptan parcialmente.

En ese sentido, tanto la no aceptación como la aceptación parcial, se considera como una negación al sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos previsto en los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1° Bis y 77 Bis de la Constitución Política del Estado, ya que se traduce en la no aceptación del mencionado pronunciamiento.

Esta posible actitud de la autoridad destinataria evidenciaría una falta de compromiso con la cultura de la legalidad, así como a una efectiva protección y defensa de los derechos humanos y en consecuencia demuestra también el desprecio a la obligación que tienen de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con lo que establece el artículo 1 de la Constitución Nacional.

En este orden de ideas, las recomendaciones emitidas por los organismos públicos defensores de los derechos humanos del país, requieren, además de la buena voluntad, disposición política y mejores esfuerzos de las autoridades a quienes se dirigen, ser aceptadas y cumplidas conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, reconocidos en el párrafo tercero, del multicitado artículo 1° constitucional.

Es importante mencionar que de una interpretación armónica al artículo 58 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y 100, párrafo tercero del Reglamento Interno de la misma, cuando una autoridad o servidor público acepta una recomendación, asume el compromiso de dar a ella su total cumplimiento.

Ahora bien y en caso de aceptación de la misma, deberá entregar dentro de los cinco días siguientes las pruebas correspondientes a su cumplimiento.

La falta de presentación de pruebas dará lugar a que se interprete que la presente Recomendación no fue aceptada, por lo que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos quedará en libertad de hacer pública precisamente esa circunstancia.

Notifíquese al señor Q1, en su calidad de quejoso, de la presente Recomendación, remitiéndole con el oficio respectivo, un ejemplar de esta resolución con firma autógrafa del infrascrito para su conocimiento y efectos legales procedentes.

EL PRESIDENTE

DR. JUAN JOSÉ RÍOS ESTAVILLO